

EL DEBATE COMERCIO INTERNACIONAL VS. ECOLOGÍA

UNA SÍNTESIS INTERPRETATIVA

Heraldo Muñoz

En este artículo se examinan aspectos centrales del debate actual sobre comercio exterior y medio ambiente, a partir de la premisa de que la relación entre ambos, si bien ha sido conflictiva, puede y debe ser mutuamente provechosa en aras del objetivo de un desarrollo sustentable.

El autor advierte que para alcanzar dicho objetivo es preciso contar con mayores estudios empíricos sobre el tema y realizar esfuerzos para armonizar las normas ambientales a nivel internacional y esclarificar el papel que desempeñan las diversas organizaciones internacionales en la materia. Al respecto, señala que las políticas internacionales de cooperación ofrecen mayores perspectivas de éxito perdurable en materia de protección del medio ambiente que las sanciones al comercio. Por otro lado, subraya que las políticas de cooperación técnica y las medidas orientadas hacia el mercado que favorecen la innovación y ofrecen incentivos para la protección del medio ambiente parecen constituir caminos particularmente propicios para alcanzar las metas ambientales. Las prácticas ambientales adecuadas, concluye finalmente, constituyen también prácticas comerciales apropiadas, pues representan una buena promoción de las ventas, incluidas las exportaciones.

HERALDO MUÑOZ. Embajador de Chile ante la OEA y ex Presidente de la Comisión del Medio Ambiente de la OEA. Los puntos de vista presentados aquí son los del autor y no representan necesariamente la opinión de la Comisión del Medio Ambiente de la OEA o del Gobierno de Chile.

En los últimos años, la relación que existe entre el comercio internacional y el medio ambiente ha generado creciente interés, preocupación y controversia. El debate sobre un acuerdo complementario en materia de medio ambiente como un requisito para la ratificación del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (Nafta) es un buen ejemplo al respecto.

Hay quienes sostienen que debería asignarse énfasis a los efectos de las políticas ambientales sobre el comercio en términos de, por ejemplo, el impacto sobre los costos y la competitividad, el surgimiento de barreras no arancelarias de “tercera generación” o “barreras verdes” al comercio y los efectos sobre las corrientes de inversión extranjera. Con fundada razón, tales preocupaciones revisten particular intensidad para los países en desarrollo que basan sus estrategias de crecimiento económico en la expansión de las exportaciones.

Desde una perspectiva diferente, hay quienes enfatizan el impacto, tanto positivo como negativo, del comercio internacional sobre el medio ambiente. En un contexto de creciente liberalización del comercio, se argumenta que el comercio puede ejercer un efecto negativo a través del movimiento y el intercambio internacional de bienes que directamente perjudican los ecosistemas o representan un peligro para la población o el entorno natural de un país. En este caso, se sostiene que es preciso establecer controles al comercio.

En general, los ambientalistas arguyen que a través de la estricta aplicación del principio de que “quien contamina paga” en cada etapa del ciclo de vida de un producto, debería internalizarse la totalidad del costo de protección del medio ambiente, reflejándose en el precio final del producto comercializado. En consecuencia, los ambientalistas tienden a pensar que quienes no internalizan tales costos obtienen una ventaja competitiva desleal, incluso aquellos países en desarrollo que aplican normas ambientales menos estrictas que las que prevalecen en las naciones altamente desarrolladas. Mediante este razonamiento se tiende a justificar la imposición de barreras comerciales a aquellos productos importados que no satisfacen los niveles más altos de protección del medio ambiente. Con frecuencia, los productores de los países desarrollados promueven la aplicación de tales medidas para contrarrestar lo que pueden percibir como “dumping ecológico”, o simplemente para lograr una ventaja competitiva elevando el costo de producción de sus competidores extranjeros.

Este artículo analiza los puntos principales del debate en curso sobre comercio exterior y medio ambiente. Más que intentar extraer con-

clusiones definitivas, sólo se procurará destacar los principales puntos de dicha discusión y ofrecer algunas sugerencias para la investigación futura y la adopción de políticas sobre la materia. La premisa fundamental de este ensayo es que si bien la relación entre comercio y medio ambiente ha sido conflictiva, puede y debe ser mutuamente provechosa en la perspectiva de un desarrollo sustentable.

El temor de los ambientalistas: Comercio a toda costa

En los últimos años se ha observado en el hemisferio occidental un vigoroso movimiento en favor del libre comercio y la integración económica, mientras que, a un nivel más general, se ha profundizado la globalización económica y la interdependencia entre las naciones. La firma del Nafta (Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte) por los Estados Unidos, México y Canadá; la entusiasta respuesta de los países de América Latina y el Caribe a la “Iniciativa para las Américas”; el acuerdo de libre comercio suscrito entre Chile y México y los esfuerzos de integración económica llevados a cabo en el marco del Mercosur por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay constituyen ejemplos de la tendencia hacia la liberalización y la expansión del comercio en las Américas.

Paralelamente, desde Canadá hasta Chile, la región ha presenciado una creciente preocupación por el medio ambiente. En contraste con lo que ocurría hace una década, en la actualidad los aspectos ambientales constituyen una prioridad de política pública en la agenda de, prácticamente, todos los países de las Américas. Han surgido numerosos grupos no gubernamentales dedicados a estudiar y a promover la conservación del medio ambiente, y las encuestas de opinión pública demuestran que los ciudadanos de los Estados Unidos, Canadá y de los países latinoamericanos y caribeños asignan una gran importancia al control de la contaminación en las grandes ciudades y en las zonas costeras, así como les preocupa la pérdida de la diversidad biológica y, en general, el deterioro de los ecosistemas.

En el hemisferio occidental, muchos consideran que el medio ambiente de las Américas está siendo dañado, y que uno de los agresores es la liberalización del comercio. Según este punto de vista, “las propuestas y los programas de liberalización económica han tendido a reforzar y agravar los problemas ambientales de la región”, en tanto que el estilo de desarrollo

¹ Puede verse un punto de vista similar en Steven Sanderson, *The Politics of Trade in Latin American Development* (Stanford: Stanford University Press, 1992), capítulo 3.

asociado con las políticas de libre comercio tiende a profundizar “la sobreexplotación de aquellos recursos con respecto a los cuales los países tienen ventajas comparativas, y, al mismo tiempo, subutilizar una serie de factores ambientales que empleados en forma adecuada podrían mejorar el bienestar nacional y regional”.¹

Por ello, quienes comparten esta perspectiva sostienen que las consideraciones ambientales deberían “tratarse en la mesa de negociaciones como componentes esenciales de una economía mundial estable y como precursores necesarios del desarrollo sustentable”, y que “las preocupaciones ambientales contenidas en los acuerdos comerciales deberían considerarse como elementos que promueven la productividad a largo plazo y, en consecuencia, como una estrategia de inversión que asegurará el futuro del comercio libre”.²

En algunos casos, la crítica ambientalista al libre comercio es mucho más severa, cuestionando no sólo la liberalización del comercio en general sino que, además, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en particular, incluso la Ronda Uruguay de negociaciones destinadas a fortalecer y ampliar el libre comercio.

Si bien pocos individuos o instituciones cuestionarían el papel positivo que desempeña el comercio en la promoción del desarrollo económico, el “crecimiento no reglamentado y basado en el comercio” ha sido criticado como conducente a: “la sobreexplotación de recursos naturales en un esfuerzo por contrarrestar los bajos precios de los productos básicos o amortizar la deuda; la transferencia de industrias obsoletas y contaminantes a los países en desarrollo; la destrucción de comunidades nativas y locales, y el persistente empobrecimiento de un creciente número de personas, tanto en el Norte como en el Sur”.³

Sin embargo, algunos estudios empíricos ponen en duda algunas de estas críticas. Steven Sanderson sostiene que “la tasa de extracción de recursos naturales por parte de los países de América Latina no difirió en los primeros años de la crisis de la deuda, de la registrada en el período 1975-1981. Las tasas de crecimiento real de la agricultura, la silvicultura,

² Véase Chris Harwell y Robin Rosenberg, “Free Trade and the Environment: The Hemispheric Challenge”, trabajo presentado en el Seminario de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre Comercio Internacional y Medio Ambiente, Santiago de Chile, abril, 1992, p. 8.

³ Greenpeace International, “Unced and Free Trade”, trabajo presentado en la cuarta reunión de la Comisión Preparatoria para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 2 de marzo a 3 de abril de 1992, Nueva York, p. 1.

la pesca y la minería no se relacionaban estadísticamente con la apertura, el ritmo de modificación del tipo de cambio real o el servicio de la deuda”. Sanderson afirma, no obstante, que “la presión externa probablemente dio como resultado una mayor explotación de los recursos naturales, pero como un producto complejo de los ajustes internos antes que como una simple respuesta a los problemas del comercio y la balanza de pagos”.⁴

La hipótesis de la transferencia de industrias contaminantes a los países en desarrollo a través de la liberalización del comercio también ha sido cuestionada. Konrad von Moltke sostiene que los costos ambientales “no constituyen un factor en las decisiones sobre localización de las empresas bien administradas” y que existen fuertes indicaciones de que “aquellas empresas que actualmente dedican una significativa atención a su comportamiento ambiental han estado motivadas por preocupaciones acerca de la reputación de la empresa, el temor a la reacción de los consumidores o presiones reglamentarias, pero raramente por razones relacionadas con el costo de la protección del medio ambiente”. De hecho, agrega Moltke, no hay evidencias de que dicho costo haya constituido un factor competitivo significativo en el caso de los bienes manufacturados. El costo ambiental directo, según el mismo autor, alcanza un promedio del 2 al 3 por ciento de los costos de manufactura en la mayoría de los países de la OCDE, elemento que reviste “muy limitada importancia” en comparación con otros factores que afectan a la competitividad.⁵

El tema de la localización de industrias contaminantes ha sido analizado extensamente por Patrick Low, economista del Banco Mundial. Low afirma que los datos disponibles “sugieren fuertemente que la mayor pre-

⁴ Steven Sanderson, “International Trade, Natural Resources and Conservation of the Environment in Latin America”, trabajo presentado en el Seminario de OEA sobre Comercio Internacional y el Medio Ambiente, Santiago de Chile, abril 1992, pp. 16-17. Es interesante señalar que al analizar los datos de importación, Sanderson concluye que puede observarse una relación directa entre la deuda, el comercio y la explotación de recursos, desde que se observara, en el plano regional, una declinación en el volumen y el valor de las importaciones de productos agropecuarios después de la crisis de la deuda, particularmente en los peores años (1984-1987).

⁵ Konrad von Moltke, “Environmental Protection and Its Effects on Competitiveness”, trabajo presentado en el Seminario OEA sobre Comercio Internacional y Medio Ambiente, Santiago de Chile, abril 1992, p. 4. Moltke advierte, sin embargo, que la situación es bastante diferente en el caso de los productos básicos, “puesto que, por definición, son producidos directamente de recursos naturales y, por lo tanto, ejercen un impacto significativo e inevitable sobre el medio ambiente”. En consecuencia, concluye, “es más probable que la posición competitiva en relación con el comercio de productos básicos se vea afectada por los factores ambientales”.

sencia de industrias contaminantes en los países en desarrollo *no* puede atribuirse en grado significativo alguno a las diferencias internacionales en los gastos de control y eliminación de la contaminación, o, en otras palabras, a diferencias en las reglamentaciones ambientales”. El autor sugiere que una mejor explicación de las decisiones acerca de la localización industrial se relaciona con factores tales como los niveles salariales, la demanda del mercado, la distribución internacional de recursos naturales y las estrategias nacionales de industrialización. En esencia, concluye Low, lo que realmente importa desde un punto de vista ambiental “no son tanto los patrones de localización internacional de las industrias contaminantes, sino la velocidad y la eficacia con que las industrias contaminantes adopten tecnologías menos contaminantes”, agregando que el factor tecnología constituye “una razón adicional para promover la cooperación y evitar soluciones de autoayuda al enfrentar problemas ambientales con ramificaciones internacionales.”⁶

La crítica ambientalista al GATT ha generado un debate aún más amplio. Según los críticos, el GATT “muestra un sesgo en favor de los objetivos comerciales y no logra alcanzar un equilibrio entre el comercio y el medio ambiente”, mientras que su informe titulado “Trade and Environment” de febrero de 1992 “omite o asigna insuficiente énfasis a las

⁶ Patrick Low, “The International Location of Polluting Industries and the Harmonization of Environmental Standards”, trabajo presentado en el Seminario OEA sobre Comercio Internacional y Medio Ambiente, Santiago de Chile, abril 1992, p. 4. En otros estudios empíricos previos, Patrick Low concluye que las diferencias nacionales en las reglamentaciones ambientales no han constituido un factor explicativo importante en el cambiante patrón de localización de industrias contaminantes, debido al hecho de que “los gastos de control y eliminación de la contaminación efectuados por las empresas no parecen haber ejercido un efecto significativo sobre la competitividad en la mayoría de las industrias, ya que estos gastos representan una modesta parte de los costos totales” (el coeficiente promedio ponderado de los costos de control y eliminación de la contaminación en las empresas de los Estados Unidos alcanzaba al 0,54 por ciento en 1988; el coeficiente más alto para una industria en particular, la industria del cemento, era apenas superior al 3 por ciento). Véanse Patrick Low, “Trade Measures and Environmental Quality: The Implications for Mexico’s Exports”, y Patrick Low y Alexander Yates, “Do Dirty Industries Migrate?”, en Patrick Low (editor), *International Trade and the Environment* (Washington D.C.: World Bank Discussion Papers, 1992).

⁷ Véase World Wide Fund for Nature, “The GATT Report on Trade and Environment: A Critique”, WWF International, Suiza 1992, pp. 1 y 7.

⁸ Véase Greenpeace International, *op. cit.* p. 3. Véase también Eduardo Gudynas, “Comercio y medio ambiente en América Latina: Muchas preguntas, pocas respuestas”, *SICA-AL*, N° 1, 1991, CLAES, Uruguay, p. 7.

principales preocupaciones ambientales”, como la necesidad de reflejar el costo de la protección del medio ambiente en el precio de los bienes comercializados.⁷ Desde una perspectiva similar, el grupo de trabajo del GATT sobre aspectos ambientales, recientemente reactivado, ha sido criticado por contemplar únicamente “cómo las reglamentaciones ambientales afectan al comercio, sin considerar el impacto de los regímenes y los acuerdos comerciales sobre el medio ambiente”.⁸

Janet Welsh Brown y Lee Kimball sostienen específicamente que el GATT no constituye el foro apropiado para resolver aspectos relacionados con el comercio y el medio ambiente, y sugieren que el “marco y la burocracia actuales del GATT deben abandonar su rígida adhesión a la reducción de las barreras comerciales como la única razón de su existencia”. Según Brown y Kimball, las decisiones relacionadas con estos aspectos “se adoptan mejor en foros regionales y globales especializados en estos campos”. Recordando la experiencia de la Comunidad Europea, sostienen, además, que “las regiones pueden encontrar más fácil introducir metas nuevas, como la protección del medio ambiente y el desarrollo sustentable, en las conversaciones sobre comercio internacional”.⁹

Resulta claro que el GATT no genera consenso en cuanto a ser el foro adecuado para tratar aspectos relacionados con el comercio y el medio ambiente, y que según muchos ambientalistas, la resolución de tales problemas puede requerir una reforma del acuerdo, la convocación de una “Ronda verde”, una vez finalizadas las conversaciones de la Ronda Uruguay, o un marco totalmente distinto “en el cual se otorgue a las preocupaciones ambientales una importancia comparable a las del comercio, y ambas sean consideradas en el contexto general del desarrollo ecológicamente sustentable y el crecimiento económico”.¹⁰

⁹ Janet Welsh Brown y Lee Kimball, “Needed: New Rules and Mechanisms for Dealing with Trade and Environment Issues in the Western Hemisphere”, trabajo presentado en el Seminario OEA sobre Comercio Internacional y Medio Ambiente, Santiago de Chile, abril 1992, p. 6.

¹⁰ Edith Brown Rice, “Environment and Trade as Partners in Sustainable Development: A Commentary”, *The American Journal of International Law*, volumen 26, N° 4, octubre de 1992, p. 728. Esta autora sugiere que puede haber una interesante distinción entre dos culturas: la comunidad del medio ambiente (generalmente abierta, participatoria) y la comunidad comercial (generalmente cerrada y no acostumbrada a operar a vista del público).

El temor de los países en desarrollo orientados hacia el comercio: Proteccionismo disfrazado de verde

El surgimiento de las organizaciones verdes como fuerza política en el sistema de comercio internacional ha sido recibido con una mezcla de interés, preocupación y cierto cinismo por parte de muchos países en desarrollo, particularmente cuando a los grupos ambientales se han unido empresas del mundo desarrollado que exigen una “equiparación” mediante la imposición de derechos compensatorios y aun de embargos a las importaciones provenientes de países que, supuestamente, tienen costos ambientales menores debido a que sus normas son menos estrictas que las que existen en los países desarrollados.

Muchos países en desarrollo perciben un verdadero peligro en el surgimiento de un “proteccionismo verde” que intenta imponer sanciones y barreras al comercio sobre la base de criterios ambientales, ya sean reales o inventados.

Esta línea de pensamiento afirma que la equiparación de los costos ambientales de producción entre los distintos países supone una completa globalización de los asuntos económicos y, en consecuencia, la solución de las principales asimetrías ambientales. Si aún no se han resuelto los problemas globales más importantes relacionados con el medio ambiente — continúa la argumentación—, resulta entonces claro que las propuestas orientadas a imponer una equiparación de los costos ambientales a nivel internacional están guiadas por un motivo proteccionista.¹¹ Para evitar restricciones discrecionales al comercio, se propone en cambio la adopción de normas ambientales internacionalmente aceptadas en relación con el comercio. Pero la imposición de restricciones ambientales al comercio resulta aceptable en la medida en que afecten al “producto final” que se comercializa y no al “proceso de fabricación”. En consecuencia, si el producto mismo es ecológicamente perjudicial, un país podría aplicar medidas comerciales contra ese producto, que estarían justificadas en virtud de la excepción XX (b) del Tratado del GATT como necesarias para proteger la vida o la salud humana, animal o vegetal.¹²

¹¹ Véase Carlos Ominami, “Comercio internacional y medio ambiente”, trabajo presentado en el Seminario OEA sobre Comercio Internacional y Medio Ambiente, Santiago de Chile, abril 1992, p. 3.

¹² Véase *ibídem*, p. 4.

Esta posición fue explícitamente respaldada por el informe del Panel del GATT para México y los Estados Unidos de 1991 sobre el atún y los delfines. Según Ted MacDorman, la principal implicación de ese informe es que “los países no pueden escudriñar detrás de un producto para determinar si el proceso de producción o de fabricación fue favorable al medio ambiente”,¹³ punto de vista que sería congruente con la opinión académica vigente.¹⁴

Las autoridades de gobierno de países en desarrollo tienden a valorar el papel que desempeña el GATT en la preservación del comercio libre y la limitación del proteccionismo teniendo en cuenta, al mismo tiempo, la protección del medio ambiente. El problema con el GATT, por supuesto, es que en el momento histórico en que se formularon la legislación y los principios del organismo, no existían la necesidad y la urgencia de cumplir con metas ambientales. A pesar de la percepción de impacto negativo del citado informe del panel del GATT sobre México y los Estados Unidos con respecto al atún y los delfines, puede argumentarse —como hace MacDorman—, que el informe “no indica que en todos los conflictos suscitados dentro del GATT las consideraciones comerciales tendrán más peso que las consideraciones ambientales”,¹⁵ pero que se requiere un mayor consenso acerca de las medidas ambientales y de conservación admisibles para modificar las obligaciones del GATT. Este es un tema al que se hará referencia más adelante.

Un importante punto que refleja un sentimiento ampliamente difundido entre los países en desarrollo es que “el mundo desarrollado aún no ha sometido sus propios sistemas económicos a los criterios de sustentabilidad tan rápidamente prescritos para los países en desarrollo”. Steven Sanderson recuerda que mientras los países del Norte consideran activamente la aplicación de sanciones comerciales para orientar las políticas ambientales del

¹³ Ted L. MacDorman, “The 1991 U.S. and México GATT Panel on Tuna and Dolphin: Implication for Trade and Environment Conflicts”, *North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation*, volumen 17, N° 7 (verano de 1993), p. 473.

¹⁴ Véase John H. Jackson, citado por MacDorman, *ibídem*; véanse también David Robertson, “Trade and Environment: Harmonization and Technical Standards”, y Piritta Sorsa, “GATT and Environment: Basic Issues and Some Developing Country Concerns”, en Patrick Low (editor), *op. cit.*, pp. 309-321 y 325-340.

¹⁵ MacDorman, *op. cit.*, pp. 463 y 487. Puede hallarse un interesante informe de prensa acerca de la disputa sobre los delfines en James Brooke, “America: Environmental Dictator?”, *The New York Times*, 3 de mayo de 1992, p. F7.

Sur, “los países de la OCDE que consideran la aplicación de tales sanciones continúan aplicando sus propios subsidios a la agricultura y la energía, a un costo que se estima alcanza a un nivel de 250 mil a 300 mil millones de dólares por año, o sea, del 30 al 50 por ciento del valor agregado agrícola total”.¹⁶

El otorgamiento de subsidios agrícolas, según esta perspectiva, penaliza a los productores eficientes en los mercados competitivos y, al entregar incentivos artificiales de esta naturaleza, expandiendo la producción agrícola a través del uso de productos químicos y plaguicidas en una medida mayor a la deseable, provoca como resultado final la reducción de productividad de la tierra y un impacto ecológico catastrófico a largo plazo. En resumen, en las palabras de un experto, “la sobreproducción agrícola resultante de los subsidios y de otras medidas proteccionistas tiene un costo considerable en relación con el medio ambiente en los niveles local, regional y global”.¹⁷

Reglamentar o no reglamentar: En busca de bases comunes en materia de comercio y medio ambiente

Los puntos de vista recién analizados demuestran que existe un significativo grado de conflicto acerca de las premisas, las políticas y los propósitos de la relación comercio-medio ambiente. Para reconciliar tales

¹⁶ Steven Sanderson, “International Trade, Natural Resources and Conservation of the Environment in Latin America”, *op. cit.*, p. 12.

¹⁷ Carlos Sersale di Cerisano, “The Environment and International Agricultural Trade: The Implications of Protectionism”, trabajo presentado en el Seminario OEA sobre Comercio Internacional y Medio Ambiente, Santiago de Chile, abril 1992, p. 6. El supuesto de que la eliminación de los subsidios agrícolas producirá inevitablemente importantes beneficios ambientales a los países involucrados es cuestionado en cierta medida en un informe producido por WWF. El informe sostiene que los cortes efectuados en tales subsidios “tendrían complejos y amplios efectos sobre la estructura de las industrias agrícolas nacionales. Los mismos cortes en los subsidios harían que algunos agricultores redujeran el uso de insumos ecológicamente perjudiciales, mientras que otros responderían incrementando su uso. En muchos casos (por ejemplo en tierras marginales), los cortes en los subsidios ocasionarían una mayor consolidación y especialización de las explotaciones, así como aumentos a corto plazo en la intensidad de la producción, todo lo cual implicaría un mayor perjuicio ambiental” (véase WWF, “The General Agreement on Tariff and Trade, Environmental Protection and Sustainable Development”, *WWF International Discussion Paper*, Suiza, noviembre de 1991, p. 24).

tensiones en términos de la meta ampliamente aceptada del desarrollo sustentable, ya que tanto las políticas comerciales como las ambientales revisten suma importancia, es necesario concentrarse en el tema de los acuerdos y las reglamentaciones internacionales.

Con el fin de determinar el mejor curso de acción a seguir, es conveniente examinar, en primer lugar, cuáles son los acuerdos internacionales que ya reglamentan el comercio y el medio ambiente.

En los últimos años se ha observado una notable proliferación de acuerdos internacionales relacionados con la protección del medio ambiente, así como de las reglamentaciones ambientales nacionales que afectan al comercio. Entre 1933 y 1990 se estima que se han suscrito 127 acuerdos multilaterales sobre temas relacionados con el medio ambiente, 17 de los cuales incluyen medidas que se relacionan con el comercio internacional.

Cada vez más los acuerdos internacionales sobre el medio ambiente incluyen disposiciones comerciales, lo que ha inducido a un autor a afirmar que “la condicionalidad verde puede aplicarse como parte de un conjunto formal de acuerdos multilaterales destinados a encarar determinados aspectos o problemas ambientales, lo que ha venido en llamarse un régimen ambiental internacional”.¹⁸ Entre los acuerdos multilaterales más importantes que imponen restricciones al comercio con el fin de preservar el medio ambiente, pueden mencionarse la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites); el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, aprobado en marzo de 1989, y el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, aprobado en 1988.

En el caso de la Cites y la Convención de Basilea, las restricciones comerciales tienen por finalidad modificar el flujo de bienes en el comercio internacional, a fin de moderar su impacto directo negativo sobre el medio ambiente: la extinción de la vida silvestre y la eliminación de desechos, respectivamente. En el caso del Protocolo de Montreal, se aplican medidas comerciales para reducir los efectos estructurales negativos de la producción y el uso de clorofluorocarbonos y otros productos químicos que afectan la capa de ozono, y para impedir el surgimiento de beneficiarios automáticos a través de controles comerciales con Estados no participantes.

¹⁸ Andrew Hurrell, “Green Conditionality”, borrador de documento, Nuffield College, Oxford, Inglaterra, 1992, p. 23.

El GATT también incluye normas que permiten a los países adoptar medidas comerciales para proteger su medio ambiente y sus recursos contra los perjuicios causados ya sea por productos importados o producidos internamente. Como es bien conocido, el artículo XX (b) del Acuerdo permite la aplicación de prohibiciones o restricciones destinadas a asegurar el cumplimiento de las políticas internas relacionadas con la salud y la seguridad humanas y la conservación de animales y plantas, en la medida en que tales medidas comerciales resulten “necesarias” (en el sentido de que no se dispone o se pueden aplicar otros métodos), su alcance se limite a la jurisdicción del país que las ejerce y que tales restricciones sean puestas en práctica sobre una base no discriminatoria. El artículo XX (g) permite restricciones comerciales relacionadas con la conservación de recursos naturales agotables siempre que tales medidas sean no discriminatorias, estén “orientadas principalmente” a la conservación del recurso, se apliquen conjuntamente con restricciones sobre la producción y el consumo interno, y tengan por finalidad conservar recursos dentro de la jurisdicción del país en cuestión. Adicionalmente, el artículo XI (2) (a) permite aplicar prohibiciones o restricciones a la exportación en forma temporaria para impedir o aliviar escaseces críticas de “productos alimenticios u otros productos esenciales para la parte contratante”.

El GATT limita las restricciones al comercio relacionadas con el medio ambiente a aquellas —en las palabras del Director General del GATT, Arthur Dunkel— “que estén justificadas por las circunstancias y que no vayan más allá de lo esencial para lograr el objetivo de política involucrado”. En otras palabras —agrega Dunkel—, no debería existir “un pretexto para reducir la competencia en los mercados mundiales. En resumen, las medidas comerciales se requieren para satisfacer las condiciones de legitimidad y proporcionalidad.”¹⁹

Antes del famoso caso del atún y los delfines entre los Estados Unidos y México, los paneles del GATT habían considerado cuatro casos en los cuales los países justificaron restricciones comerciales, en virtud del artículo XX, sobre la base de preocupaciones ambientales. Esos cuatro casos —según Pearson y Repetto— sugieren que el “GATT ha procurado identificar medidas proteccionistas disfrazadas, para limitar la aplicación de medidas comerciales relacionadas con determinados productos a aque-

¹⁹ Arthur Dunkel, “Address to the Conference of the International Herald Tribune in Association with the Thailand Development Research Institute ‘Asia and the Pacific: Merging Business and the Environment’”, comunicado de prensa del GATT, Ginebra, 23 de enero de 1992, p. 8.

llos casos en los cuales dichas medidas son necesarias, y a aplicar normas convencionales de ajuste fronterizo para impuestos directos sobre productos sin determinar el propósito del impuesto”. Los mismos autores afirman que el caso del atún y los delfines “planteó tanto el tema de la extraterritorialidad como el de la reglamentación de los productos versus la producción”, agregando que los paneles de resolución de disputas del GATT han procurado reducir la latitud que supone la redacción del artículo XX, interpretando las excepciones (b) y (g) en el sentido de que es preciso que éstas, entre todas las medidas reglamentarias disponibles, impongan la menor carga al comercio, tengan una base científica y signifiquen que los recursos naturales del país no constituyen una parte de los bienes comunes globales.²⁰

Puesto que el GATT es el organismo central del sistema mundial de comercio multilateral, sus normas y decisiones muestran, por cierto, un sesgo más favorable a la promoción del libre comercio que a la protección del medio ambiente. Por lo tanto, si bien algunos autores piensan que un GATT reformado y un mejorado Código de Normas del GATT²¹ deberían continuar constituyendo el principal marco para reglamentar los aspectos relacionados con el comercio y el medio ambiente,²² otros consideran claramente que el GATT no constituye el foro apropiado para resolver conflictos entre las medidas relacionadas con el comercio y el medio ambiente.

Esta última posición ha sido esgrimida por Janet Welsh Brown y Lee Kimball, quienes proponen la creación, a nivel hemisférico, de un

²⁰ Véase Charles S. Pearson y Robert Repetto, “Reconciling Trade and Environment: The Next Steps”, trabajo preparado para el Comité sobre Comercio y Medio Ambiente de la EPA, diciembre de 1991, pp. 17-19.

²¹ El Acuerdo sobre Barreras Técnicas al Comercio o “Código de Normas” fue adoptado en 1980 y “tiene por objeto asegurar que la verificación y la adopción de reglamentaciones o normas técnicas relacionadas con la salud, la seguridad, la protección de los consumidores y el medio ambiente y otros propósitos de control no originen barreras innecesarias al comercio”. Los signatarios confrontados con un desafío a determinada reglamentación pueden optar por justificar la reglamentación en el marco del GATT o del Código. Hasta ahora, nunca se ha producido una resolución formal de una disputa en el marco del Código de Normas (véase Robert Housman y Durwood Zaelke, “Trade, Environment and Sustainable Development: Primer”, *Hastings International and Comparative Law Review*, vol. 15, N° 4 (verano de 1992), pp. 554-555).

²² Véase, por ejemplo, Thomas J. Schoenbaum, “Free International Trade and Protection of the Environment: Irreconcilable Conflict?”, *American Journal of International Law*, vol. 86, N° 4 (octubre de 1992), pp. 700-727.

mecanismo comercial que, sobre una base permanente, ayude a encarar los temas de la liberalización del comercio y la protección del medio ambiente y el desarrollo sustentable, y sugiera los correspondientes programas, procedimientos y normas. El denominado Consejo de las Américas para el Comercio y el Medio Ambiente —según las autoras— podría constituir un esfuerzo inicial para proporcionar nuevas soluciones a un nuevo conjunto de problemas comerciales y podría “también ayudar a sentar las bases para reformar el sistema de comercio mundial”.²³

Por su parte, el U.S. Council for International Business ha manifestado que “los acuerdos multilaterales concentrados en temas globales específicos relacionados con el medio ambiente constituyen la forma apropiada de formular las políticas ambientales globales, en vez del GATT”. El Council agrega, sin embargo, que el GATT desempeña un papel positivo “asegurando la disciplina en las medidas comerciales adoptadas sobre la base de la protección de medio ambiente cuando estas medidas no están contempladas en acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente y cuando violan un requisito del GATT”.²⁴

Un punto pertinente es que la existencia de diferentes mecanismos destinados a resolver controversias similares relacionadas con el comercio y el medio ambiente puede generar diversos problemas. En primer lugar, no hay una definición clara acerca de cuál mecanismo específico es aplicable a una determinada situación. La selección del mecanismo, por lo tanto, puede estar determinada por factores discrecionales o circunstanciales. En segundo lugar, esta dispersión de mecanismos puede originar decisiones contradictorias; por ejemplo, una controversia resuelta en el marco de la Cites o del Protocolo de Montreal tenderá a respaldar la protección de especies en peligro o de la capa de ozono, respectivamente, en tanto que una decisión adoptada en el marco del GATT tenderá a promover el comercio en vez de la protección del medio ambiente.²⁵

Cabe señalar que los acuerdos internacionales válidos gozan del mismo status en relación con el GATT como obligación internacional de

²³ Janet Welsh Brown y Lee Kimball, *op. cit.*, pp. 18-20.

²⁴ “Statement of the United States Council for International Business: An Integrated Approach to Environment and Trade Issues and the GATT”, Nueva York, 1 de mayo de 1992, p. 4.

²⁵ Gonzalo Biggs, “The Interrelationship between Environment and International Trade in Latin America: The Legal and Institutional Framework”, trabajo presentado en el Seminario OEA sobre Comercio Internacional y Medio Ambiente, Santiago de Chile, abril 1992, p. 22.

las partes, y que si las restricciones comerciales aplicadas en virtud de acuerdos ambientales multilaterales posteriores al GATT se contraponen a una obligación anterior del GATT, de acuerdo con el artículo 30 de la Convención de Viena sobre tratados, las restricciones comerciales aplicadas entre partes que también son miembros del GATT “constituyen, en efecto, excepciones al GATT, en virtud de que en su condición de tratados posteriores tienen prioridad”.²⁶

En el caso del Nafta, celebrado entre Canadá, los Estados Unidos y México, se incluyeron en el texto referencias explícitas sobre metas ambientales y de protección de la salud y estándares ambientales. En el preámbulo del Nafta se asumió un compromiso con el desarrollo sustentable y la conservación y la protección del medio ambiente, en tanto que disposiciones del acuerdo figuran en cuatro capítulos: medidas sanitarias y fitosanitarias (capítulo 7b), medidas relacionadas con estándares (capítulo 9), inversiones (capítulo 11) y resolución de disputas (capítulo 20). En breve, dichas disposiciones tienen como propósito asegurar: a) el mantenimiento de la integridad de los regímenes internos de reglamentación ambiental de las partes, (b) la realización de esfuerzos tendientes al mejoramiento de los estándares, (c) que la resolución de disputas relacionadas con las medidas ambientales se realice en forma ecológicamente sensible, (d) la protección de las disposiciones comerciales de los principales acuerdos internacionales, y (e) que las partes se abstengan de atraer o retener inversiones que permitan la creación de refugios para la contaminación. Además del texto concreto del Nafta, los tres países acordaron crear una Comisión Norteamericana sobre Cooperación Ambiental, que tiene por objeto “poner en funcionamiento un proceso tendiente a promover una sostenida cooperación ambiental trilateral, efectiva y de largo plazo”. En este sentido, los tres países suscribieron un Memorando de Entendimiento sobre Educación Ambiental, procurando promover, coordinar y llevar a cabo actividades conjuntas de educación y capacitación ambiental.²⁷

²⁶ Thomas J. Schoenbaum, *op. cit.*, p. 719.

²⁷ Véase “Press Communiqué on Environmental Cooperation in North America”, EPA-Embajada de México-Embajada de Canadá, Washington, D.C., 17 de septiembre, 1990. El gobierno de México, además, ha impulsado un Plan Ambiental Integral para la Zona Fronteriza y ha emprendido importantes medidas para reducir la contaminación en Ciudad de México y creó el cargo ejecutivo de Procurador General para el Medio Ambiente con el propósito de fiscalizar el cumplimiento de la reglamentación ambiental. Entre otros materiales de interés, véanse Richard A. Nuccio y Angelina M. Ornelas, “Mexico’s Environment and the

Algunos sectores criticaron el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte argumentando que las disposiciones ambientales son “vagas o ambiguas”; que el Capítulo sobre estándares exime a los estándares referidos a procesos de producción, siguiendo así la línea del GATT; que el acuerdo desconoce los derechos de gobiernos subnacionales y que en su lista de objetivos las metas ambientales están ausentes. En un sentido más amplio, algunos críticos han calificado el texto del Nafta como “hostil hacia las medidas ambientales”, y han expresado preocupación respecto a la capacidad de exigir el cumplimiento de sus disposiciones por parte de la comisión trilateral sobre medio ambiente.²⁸ En todo caso, un número importante de analistas ha señalado ya sea que “el Nafta representa un hito para el manejo de los temas ambientales en un acuerdo comercial”,²⁹ o bien que “el Nafta refleja un gran avance en relación a las disposiciones ambientales de la Ronda Uruguay”.³⁰

Más allá del GATT y de los acuerdos bilaterales o multilaterales, las medidas comerciales se utilizan ampliamente de manera unilateral para asegurar el cumplimiento de reglamentaciones y normas ambientales nacionales. Algunos países están procurando extender las reglamentaciones sobre productos nacionales para que abarquen los métodos y procesos de producción, agregando así considerables fricciones a un tema ya controvertido. Las medidas coercitivas de carácter comercial se consideran en dichos países como medios para estimular a otros países a adoptar prácticas ecológicamente adecuadas. Entre los ejemplos mejor conocidos puede mencionarse la prohibición aplicada por los Estados Unidos sobre el atún y los

United States”, en Janet Welsh Brown (ed.), *In the U.S. Interest: Resources Growth and Security in the Developing World* (Boulder: Westview Press, 1992); Timothy Atkeson, “The Mexican U.S. Border Environmental Plan”, y Jan Gilbreath, “Financing Environmental and Infrastructure Needs on the Texas-Mexico Border: Will the Mexican-U.S. Integrated Border Plan Help?”, en *The Journal of Environment and Development*, Vol. 1, N° 1 (verano 1992), pp. 143-149 y 151-175, respectivamente.

²⁸ Véanse, por ejemplo, Gary Clyde Hufbauer y Jeffrey J. Schott, *Nafta: An Assessment* (Washington, D.C.: Institute for International Economics, 1993), pp. 92-101, y Steve Charnovitz “Nafta: An Analysis of its Environmental Provisions”, *Environmental Law Reporter*, febrero 1993, pp. 10.067-10.073. Para una crítica más extensa de las disposiciones ambientales del texto del Nafta, y recomendaciones, véase Sierra Club, “Environmental Concerns Regarding the North American Free Trade Agreement”, Washington, D.C., febrero 1993.

²⁹ G. Hufbauer y J. Schott, *ibídem*, 91.

³⁰ S. Charnovitz, *op. cit.*, p. 10.072.

productos derivados del atún provenientes de México, establecida sobre la base de que la pesca accidental del delfín no cumplía con los niveles establecidos en la Ley de Protección de Mamíferos Marinos de los Estados Unidos, y las prohibiciones propuestas sobre la importación de maderas tropicales producidas en forma no sustentable.

Desde esta misma perspectiva unilateral, algunos países han introducido normas y requisitos ambientales nacionales que procuran extender su aplicación a los bienes provenientes de otras naciones. La creciente práctica del “etiquetado ecológico” presenta el peligro de que “podría crear barreras comerciales no arancelarias para favorecer deslealmente a los productos nacionales en perjuicio de los productos importados competidores”.³¹ Algunos productores privados se ajustan a sus propios códigos ambientales; sin embargo, los mismos productores privados reconocen que los diferentes países asignan distinto énfasis a los códigos y las normas, y que, además, las reglamentaciones varían ampliamente de un país a otro dependiendo de la capacidad de absorción de cada ecosistema o de los niveles de desarrollo.

Una opción menos controvertida sería procurar la armonización internacional de las diferentes normas ambientales nacionales. Tales esfuerzos podrían variar—como sostiene Candice Stevens— desde la formulación de amplios objetivos ambientales relativos al comercio, como el principio de que “quien contamina paga” y el “principio de precaución”,³² ya que no se ha establecido un conjunto específico de principios ambientales equivalente a los más avanzados principios, normas y procedimientos de resolución de disputas comerciales, hasta la efectiva armonización de normas relacionadas con los productos e incluso con los “procesos” productivos.

³¹ R. A. Reinstein, “Trade and Environment”, borrador, U.S. State Department, 1991, p. 15. En Europa, por ejemplo, los productores de embalajes se reunieron para crear el “Group Recycling of Wood” (GROW), una entidad que otorga sellos de calidad ambiental a los productores que cumplen los requerimientos de la ley Topfer de Alemania, un conjunto de reglamentaciones sobre embalajes ambientalmente apropiados. Para evitar eventuales impedimentos comerciales, algunos productores de países en desarrollo, como es el caso de Chile, se han asociado al GROW y, al cumplir con los requisitos de dicha ley, tienen acceso seguro al mercado alemán. (Véase *El Mercurio*, 3 de febrero de 1992, p. C4).

³² Véase Candice Stevens, “Organization for Economic Cooperation and Development Framework for the Discussion of Trade and Environmental Concerns”, trabajo presentado en el seminario OEA sobre Comercio y Medio Ambiente, abril 1992, p. 4.

Un ejemplo de armonización es la tarea realizada por la Comisión del Codex Alimentarius, establecida en 1962 en el marco de la FAO y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que incluye el Código de Ética para el Comercio Internacional, aprobado en 1979 y revisado en 1985. Entre otros resultados del Codex pueden mencionarse alrededor de 200 normas sobre productos básicos destinadas a proteger la salud y a estimular el comercio internacional, así como el establecimiento de niveles máximos de residuos para alrededor de 2.700 plaguicidas. Una crítica efectuada al Codex por un analista norteamericano es que en algunos casos resulta más débil que las normas existentes establecidas por la FDA (Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos).³³ En consecuencia, se ha sugerido que cualquier esfuerzo de armonización encarado a nivel internacional debería procurar armonizar “hacia arriba”, en busca de normas ambientales más estrictas y no menos firmes. Según una fuente, la introducción del principio de la “armonización hacia arriba en las reglamentaciones sobre comercio” es, justamente, “el aspecto ambiental más importante del Nafta”.³⁴

Dadas las diferencias que existen entre los distintos países y su percepciones relativas de riesgos y beneficios, lo que podría emerger en cuanto a normas internacionales sería un “enfoque de mínimo común denominador”, que contemplara el establecimiento de normas más estrictas de base científica para los países individuales. Tales normas tendrían que basarse en sólidos conocimientos científicos y en una adecuada comprensión de la situación ambiental. Sin duda, la mayoría de los países en desarrollo exigiría que dichas normas fueran diferenciadas, en términos del cronograma establecido para su aplicación³⁵ (siguiendo el modelo del Pro-

³³ Véase Hobart Rowen, “Are Food Imports Safe?”, *The Washington Post*, 31 de mayo de 1990, p. A23.

³⁴ Steve Charnovitz, “Nafta: An Analysis of its Environmental Provisions”, *op. cit.*, página 10.071.

³⁵ Según un autor, no debería ser imperativo que los países menos desarrollados adopten el mismo número o el mismo nivel de normas que los países desarrollados. Jeffrey James propone el establecimiento de “normas intermedias en el mismo sentido y con la misma justificación básica que las que subyacen en el difundido movimiento en favor de tecnologías intermedias en el Tercer Mundo. Ello no implicaría, necesariamente, que las reglamentaciones de los países desarrollados fueran menos estrictas, sino que las normas de los PMD fueran más estrictas” (véase Jeffrey James, “Product Standards in Developing Countries”, citado por C. Ford Runge y Richard M. Nolan, “Trade in Disservices: Environmental Regulation and Agricultural Trade”, *Food Policy* [febrero 1990], p. 6).

toloco de Montreal), transparentes y no discriminatorias y minimizaran las distorsiones al comercio y la inversión internacional.³⁶

La armonización internacional —particularmente a nivel global— puede no siempre resultar fácilmente asequible o factible, especialmente si tiene por finalidad lograr la “uniformidad” de las normas ambientales, por más atractivo que, ello pueda resultar como objetivo. Patrick Low sostiene a este respecto que, en primer lugar, “la capacidad de absorción de la contaminación probablemente varíe de acuerdo con la ubicación”, haciendo así que resulte económicamente ineficiente procurar lograr niveles idénticos de emisiones de contaminación en todos los lugares, y, en segundo lugar, que “en un determinado momento, no todas las sociedades coincidirán en cuanto a lo que constituye una calidad ecológicamente óptima”. Low se inclina en cambio por la idea de que “los gobiernos podrían ponerse de acuerdo acerca de algún tipo de normas ambientales mínimas que respondan a las diferentes capacidades locales de absorción y las distintas prioridades sociales”.³⁷

Incluso suponiendo que existiera consenso en cuanto a la naturaleza de la armonización internacional de las normas ambientales, sería preciso elegir un foro para este esfuerzo. El GATT no constituye el foro apropiado para la formulación de normas sobre protección al medio ambiente, ya que carece del mandato y de los recursos técnicos para dicha tarea. Las organizaciones multilaterales existentes, incluso la FAO, el Pnuma, la OMS y la Unctad, quizá deberían coordinar sus esfuerzos, analizando cuidadosamente qué foro o foros se utilizan para lograr la armonización en determinados sectores con el fin de maximizar las ventajas comparativas de cada organización. Lo que parece claro, es que a falta de acuerdo acerca de las normas internacionales básicas, “[c]iertos grupos dentro de los países continuarán

³⁶ El capítulo 1 de la Agenda 21, aprobado en la reunión de la Cnumad celebrada en Río, expresa lo siguiente en relación con las normas y la posición de los países en desarrollo: “Asegurar que los factores especiales que afectan el medio ambiente y las políticas comerciales en los países en desarrollo sean tenidos en cuenta en la aplicación de normas ambientales, así como en la aplicación de medidas comerciales. Conviene señalar que las normas que son válidas en la mayoría de los países desarrollados pueden resultar inapropiadas y tener un costo social no justificado en los países en desarrollo” (véase “International Cooperation to Accelerate Sustainable Development in Developing Countries and Related Domestic Policies”, sección 1, capítulo 1, Agenda 21, PC/100/add. 3, Rev. 2, 26 de marzo de 1992).

³⁷ Patrick Low, “The International Location of Polluting Industries and the Harmonization of Environmental Standards”, *op. cit.*, pp.13-14.

defendiendo el uso de reglamentaciones como proteccionismo disfrazado, o bien el aflojamiento de las normas sobre la calidad del medio ambiente en aras de una mayor competitividad.³⁸

Conclusión

El argumento básico de este artículo es que si bien la relación entre el comercio y el medio ambiente ha sido conflictiva, los gobiernos y los actores privados deben y pueden lograr que el comercio internacional y las políticas ambientales se apoyen mutuamente en favor de un desarrollo sustentable. Tan amplio propósito requerirá, sin duda, una mayor investigación empírica y un análisis más profundo de los temas relacionados con el comercio y el medio ambiente, así como esfuerzos tendientes a la armonización de las normas ambientales a nivel internacional, el esclarecimiento del papel que desempeñan las diversas organizaciones internacionales respecto de tales temas —con el fin de asegurar transparencia y compatibilidad con las obligaciones internacionales en la aplicación de medidas comerciales relacionadas con el medio ambiente— y, por último, el análisis de las causas que originan los problemas del medio ambiente y el desarrollo, para evitar la aplicación de restricciones o distorsiones al comercio en las políticas de protección del medio ambiente.

Las medidas comerciales pueden y deben utilizarse para lograr objetivos ambientales siempre que las medidas no sean discriminatorias, sean transparentes, estén basadas en conocimientos científicos, preferiblemente multilaterales, y tengan en cuenta la especial situación de los países en desarrollo.

En último término, el crecimiento de la economía y de la actividad comercial son congruentes con una mayor protección del medio ambiente. Como se ha señalado, “las políticas que internalizan las externalidades de la contaminación pueden elevar los costos y reducir la producción en determinadas actividades, y este enfoque resulta obviamente preferible a la búsqueda indiscriminada del crecimiento a cualquier precio. Se trata de ajustar los precios relativos en forma tal que reflejen los costos y beneficios sociales, y no de condenar la mayor actividad económica por el hecho de que ésta supone costos ambientales y consume recursos escasos”.³⁹

³⁸ C. Ford Runge y Richard M. Nolan, *op. cit.*, p. 7.

³⁹ Patrick Low, “International Trade and the Environment: An Overview”, en P. Low (editor), *op. cit.*, pp. 7-8.

En este mismo sentido, la cooperación internacional ofrece mayores perspectivas de éxito perdurable en materia de protección del medio ambiente que las sanciones al comercio. Las políticas de cooperación técnica y las medidas orientadas hacia el mercado que favorecen la innovación y crean incentivos para la protección del medio ambiente parecen constituir el camino ideal para alcanzar las metas ambientales. Las prácticas ambientales adecuadas constituyen también prácticas comerciales apropiadas, pues representan una buena promoción para las ventas, incluyendo las exportaciones. La imagen reviste cada vez más importancia para el público en general y, en consecuencia, se ha convertido en un factor competitivo para las empresas. Por lo tanto, el futuro de muchas empresas bien puede depender de que se anticipen y satisfagan los nuevos requerimientos de la sociedad en relación a los productos ecológicamente adecuados. En particular los países en desarrollo, como afirma Konrad von Moltke, deben considerar la política ambiental no como una fuente de problemas, sino como un motor de innovación que estimula un crecimiento económico sostenido: “la falta de integración del imperativo ambiental en las estrategias de desarrollo —concluye Moltke— se traduce en economías que no innovan y, por tanto, no son internacionalmente competitivas, por lo que continuarán dependiendo de los mercados y las prioridades de los países más desarrollados”.⁴⁰

En el futuro, los gobiernos, las organizaciones internacionales y los actores privados deberán estimular y realizar más ajustes y cambios de política en materia de comercio y medio ambiente. Sólo entonces la liberalización del comercio y la aplicación de políticas ambientales serán suficientes para asegurar el logro de la meta universal de un desarrollo sostenible. □

⁴⁰ Konrad von Moltke, *op. cit.*, p. 10.